

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: MARÍA CARINA CELIS CRUZ
Demandado	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Interviniente ad Excludendum	: LIBIA DEL SOCORRO SERNA DE CARDONA
Litisconsorte	
Necesario por pasiva	: MARÍA MIRIAM HERRERA
Radicado	: 05001 31 05 022 2016 00553 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social -Pensión de sobrevivientes causada por muerte de pensionado, reconocida por la entidad de seguridad social en favor de compañera permanente, disputada por compañera permanente y cónyuge con vínculo matrimonial vigente, separación de hecho y liquidación de sociedad conyugal.
Decisión	: Confirma Sentencia absolutoria
Sentencia No	: 132

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, como ponente**, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece

ANTECEDENTES

Demanda de la señora María Carina Celis Cruz en calidad de compañera permanente.

Pretensiones:

Se condene al reconocimiento y pago de **pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su compañero permanente Luis Eduardo Cardona Carmona**, en un 100% y en forma vitalicia, con efectos **a partir del día 21 de mayo de 2015**, intereses moratorios, indexación, costas procesales, condenas ultra y extra petita.

Hechos relevantes:

Se afirma en la demanda que la señora María Carina, convivió con el pensionado Luis Eduardo Cardona Carmona, desde el 10 de febrero de 1986, hasta el día de su fallecimiento ocurrido el 21 de mayo de 2015; no procrearon hijos, nunca se separaron, el fallecido velaba económicamente por la señora María Carina; reclamó pensión de sobrevivientes, siendo negada mediante Resolución GNR 361354 de 2015 y le fue otorgada a la señora María Miriam Herrera.

la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

Demanda de la señora Libia del Socorro Serna de Cardona como interviniente ad excludendum, en calidad de cónyuge supérstite:

Pretensiones:

Se condene al reconocimiento y pago de **pensión de sobrevivientes**, en forma vitalicia, **causada por la muerte de su cónyuge Luis Eduardo Cardona Carmona**, a partir del día 21 de mayo de 2015, intereses moratorios, costas procesales.

Hechos relevantes de la demanda:

Sostiene que **contrajo matrimonio católico** con el señor Luis Eduardo el día **22 de diciembre de 1962**; vínculo que se mantuvo vigente hasta la muerte de su cónyuge ocurrida el 21 de mayo de 2015, quien era pensionado por vejez; convivieron por más de 26 años desde su matrimonio, procrearon dos (2) hijos de nombres Luis Eduardo y Martín Adolfo Cardona Serna; mediante trámite judicial fue declarada la disolución y liquidación de la sociedad conyugal en el año 1988; aduce que durante la convivencia se construyó más del 50% del derecho pensional del causante. Reclamó pensión de sobrevivientes el día 21 de abril de 2016, siendo negada mediante Resoluciones GNR174478 y VPB30326 de 2016, por no haber convivido con el causante mínimo durante cinco (5) años antes de su muerte, sin tener en cuenta que esa convivencia puede acreditarse en cualquier tiempo; habiéndose reconocido la prestación económica en favor de la señora María Miriam Herrera, desconociendo que la cónyuge supérstite reúne los requisitos para ser beneficiaria.

Respuestas a las demandas:

COLPENSIONES a través de apoderadas judiciales, aceptó lo referente a la calidad de pensionado del causante, su fallecimiento, la reclamación de la pensión de sobrevivientes y el contenido de los actos administrativos mediante los cuales resolvió sobre las solicitudes de reconocimiento de la prestación económica, en favor de la señora María Miriam Herrera, siendo negada a las señoras María Carina Celis Cruz y Libia del Socorro Serna de Carona. Se opuso a las pretensiones de las demandas y formuló las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, buena fe, improcedencia de intereses moratorios, imposibilidad de condena en costas, prescripción, compensación, falta de causa para pedir.

Por su parte, el apoderado de la señora **MARÍA MIRIAM HERRERA** admitió lo referente al fallecimiento del señor Luis Eduardo y su calidad de pensionado, con quien afirma convivió por más de 30 años, procreando a Sandra Milena y Claudia Cristina Cardona Herrera; negó los demás hechos de la demanda. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y formuló como excepción la denominada inexistencia de la obligación por falta de requisito de convivencia.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Veintidós Laboral del Circuito** de Medellín, al reconstruir la etapa de Fallo de la audiencia de trámite y juzgamiento, con fecha 31 de mayo de 2022, **declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación** respecto a la

demandante María Carina Celis Cruz y falta de causa para pedir frente a la Interviniente Libia del Socorro Serna de Cardona; absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra. Impuso costas a cargo de la demandante y la interviniente, agencias en derecho en cuantía equivalente a medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente, en favor de COLPENSIONES y de la litisconsorte necesaria por pasiva.

Recurso de Apelación apoderado de la interviniente ad excludendum señora Libia del Socorro Serna de Cardona, quien demanda en calidad de cónyuge supérstite:

Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia y en su lugar, se acojan las pretensiones formuladas en favor de la señora Libia del Socorro, para lo cual expone que **está acreditado el matrimonio contraído con el causante en el año 1962, convivieron hasta el año 1985**, procrearon dos (2) hijos, el vínculo matrimonial estuvo vigente hasta la muerte del pensionado; durante el tiempo de convivencia el señor Luis Eduardo cotizó el 66.7% de tiempo necesario para acceder a su pensión; alega que el Juez negó el derecho por no acreditarse lazos afectivos, solidaridad y ayuda mutua después de la separación de hecho, conocido como *vínculo actuante*, lo cual no se exige en la normatividad aplicable y tampoco en la jurisprudencia actual de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, citando varias Sentencias al respecto; pudiéndose en estos casos, acreditar el requisito de convivencia de los cinco (5) años, en cualquier tiempo.

Alegatos de conclusión:

Los apoderados de las partes reiteraron argumentos expuestos en el trámite de primera instancia.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **apelación**; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto Jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si hay lugar a revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si la interviniente ad excludendum señora Libia del Socorro Serna de Cardona, quien demanda en calidad de cónyuge supérstite, con vínculo matrimonial vigente, separación de hecho y liquidación de la sociedad conyugal, tiene derecho a un porcentaje de la pensión de sobrevivientes, reconocida por COLPENSIONES en el 100%, en favor de la señora María Miriam

Herrera, en calidad de compañera permanente. Se conocerá en Consulta en favor de la demandante María Carina Celis Cruz.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

No es objeto de discusión en esta segunda instancia, que el señor Luis Eduardo Cardona Carmona falleció el día 21 de mayo de 2015 (fl 19 archivo 03); percibía pensión de vejez reconocida por el I.S.S. mediante Resolución No 7085 del año 2000, con efectos a partir del 5 de enero de 1999, que al retiro de nómina equivalía a la suma de \$1.087.066 (fl 03 archivo 03); **la señora Libia del Socorro Serna Idárraga y el señor Luis Eduardo contrajeron matrimonio católico el día 22 de diciembre de 1962** en Medellín, según registro civil obrante a folio 1 archivo 072, donde aparece la siguiente nota “...*Mediante oficio Nro = 022 del Juzgado 2º Civil del Circuito de Medellín, del noviembre 16 de 1988, decretase la separación de bienes y por ella la disolución y liquidación de la sociedad conyugal formada entre dichos esposos...*” (fl 2 archivo 072).

Con ocasión del fallecimiento del pensionado Cardona Carmona, **la señora María Miriam Herrera reclamó la pensión de sobrevivientes el día 19 de agosto de 2015,** a quien **le fue reconocido el 100% del derecho a la prestación económica en calidad de compañera permanente, a partir del 21 de mayo de 2015,** con carácter vitalicio, en cuantía de \$1.087.066, según Resolución GNR 361354 del 17 de noviembre de 2015; explicando que el día 13 de mayo de 2010, la pareja rindió declaración ante

Notario, manifestando que convivían en unión libre desde hacía 25 años y habían procreado dos hijos. En el mismo acto administrativo, **COLPENSIONES negó la reclamación que había efectuado la señora María Carina Celis Cruz, el día 21 de julio de 2015, en calidad de compañera permanente**, por no acreditar el requisito de convivencia (fls 1 a 8 archivo 03).

También presentó reclamación ante la entidad de seguridad social, **la señora Libia del Socorro Serna de Cardona, el día 21 de abril de 2016**, en calidad de cónyuge supérstite; negándose el derecho mediante Resolución GNR 174478 del 16 de junio del mismo año, por no haber acreditado convivencia mínimo durante cinco (5) años antes de la muerte del causante, teniendo en cuenta que el registro civil de matrimonio tiene anotación de la liquidación de la sociedad conyugal y que según declaraciones adjuntas, la pareja convivió hasta el año 1988.

Frente a los temas objeto de apelación tenemos que:

El apoderado de la señora Libia del Socorro Serna de Cardona solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia y en su lugar, se acojan las pretensiones formuladas, afirmando que cuando la pensión de sobrevivientes es reclamada por cónyuge supérstite, con vínculo matrimonial vigente y separación de hecho, la normatividad aplicable y la jurisprudencia especializada, no exigen mantener los lazos afectivos, apoyo y solidaridad, pudiéndose acreditar el requisito de convivencia durante cinco (5) años en cualquier tiempo. Al respecto tenemos que:

El Juez de Primera Instancia explicó que la señora Libia del Socorro no demostró ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada, teniendo en cuenta que se encontraba separada de hecho del pensionado fallecido, respecto de quien se había perdido cualquier comunicación, lazo afectivo, apoyo o similar, siendo el propósito de la pensión de sobrevivientes, proteger a los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, calidad que no quedó acreditada por la interviniente.

En el caso particular, tenemos que al haber fallecido el causante señor Luis Eduardo Cardona Carmona el día 21 de mayo de 2015, **estando disputada la pensión de sobrevivientes entre dos (2) compañeras permanentes y cónyuge con vínculo matrimonial vigente, separación de hecho y liquidación de sociedad conyugal, son aplicables el literal a) y el inciso 3° del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993**, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, veamos:

“... Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b)
(...)

<Aparte subrayado **CONDICIONALMENTE** exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual

existe la sociedad conyugal vigente; ... (Negritas fuera de texto).

La jurisprudencia vigente de **la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, tiene señalado que **el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, separado de hecho, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siempre que acredite convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años en cualquier tiempo**, sin que sea necesario probar que durante ese lapso se conservó un vínculo afectivo; ver **Sentencias SL2767-2022, SL2257-2022, SL997-2022**, entre otras.

En aplicación de lo anterior, en principio, le asistiría razón al apoderado de la señora Libia del Socorro; no obstante, no puede pasarse por alto que, **además de estar aceptada la separación de hecho en el año 1985**, como se expuso en el interrogatorio de parte, esto es, desde hacía 30 años antes de la muerte del pensionado; **también fue disuelta y liquidada la sociedad conyugal en el año 1988**, hacía 27 años, según anotación contenida en el registro civil de matrimonio (fl 2 archivo 072); situación que de un lado, muestra el incumplimiento de lo consagrado en la parte final del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual **“La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”** (Negritas y subrayas fuera de texto) y del otro, evidencia que entre quienes habían contraído matrimonio, no existía ningún lazo afectivo, ni patrimonial, como para considerar a la interviniente beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada por el pensionado fallecido.

Téngase en cuenta que **la expresión “con la cual existe la sociedad conyugal vigente” fue declarada exequible por la H. Corte Constitucional mediante Sentencia C-515-19 de 29 de octubre de 2019**, al estudiar una demanda donde se afirmaba que la norma vulneraba el derecho de igualdad (Art. 13 C.P.), al establecer como requisito para el reconocimiento de la cuota parte de la pensión de sobrevivientes, que el cónyuge supérstite separado de hecho, mantenga en vigor la sociedad conyugal a la fecha del fallecimiento del causante, excluyendo al cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta. Frente a lo anterior, la Sala Plena de la H. Corte Constitucional² indicó que los cónyuges separados de hecho con y sin sociedad conyugal vigente están en situaciones diferentes, por lo cual, no son sujetos de tratamiento igual; explicando que **cuando se disuelve la sociedad conyugal, se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial y ello sumado a la separación de hecho de la pareja, conlleva a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos para derivar de allí la calidad de beneficiario**; veamos:

“...Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario...”

² Aclaración de voto Magistrada Diana Fajardo Rivera, salvamento de voto Magistrada Cristina Pardo Schlesinger

Así mismo, señaló que “...el requisito de la vigencia de la sociedad conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso...”. Citó también el artículo 1871 del Código Civil, según el cual, la sociedad conyugal se integra por dos tipos de haberes: el absoluto y el haber relativo y en el primero se incluyen las “pensiones”, salarios, honorarios, prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas y en consecuencia “...Luego, **cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial**, razón por la que **se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la expectativa de recibir una eventual prestación pensional**, según corresponda...” (Negritas fuera de texto).

Con relación al propósito o el objeto de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes, es pertinente recordar que busca brindar protección a los miembros del grupo familiar del pensionado fallecido, quienes ante la ausencia de aquél, verían afectado su sostenimiento y la atención de sus necesidades básicas, al verse desprovistos del apoyo económico que en vida les brindada el causante.

Al respecto, la H. Corte Constitucional en **Sentencia C-1094 de 2003**, al estudiar la exequibilidad de varios artículos de la Ley 797 de 2003, indicó que “...**La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia** como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que **las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia**, sin que vean alterada la situación social y

económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, **la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades...** (Negritas fuera de texto).

Así mismo, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia con Radicación 10406 del 17 de abril de 1998, indicó que “...no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la institución de **la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición...**”; criterio rememorado en SL4097-2021, al señalar “...bien vale la pena memorar que **la finalidad de la pensión de sobrevivientes es procurar el alivio al que se ve sometida la familia ante el desaparecimiento de un miembro de su núcleo**, en la medida en que se ve desprovista de aquello que le brindaba y que coadyuvaba a su congrua subsistencia...” (Negritas fuera de texto).

Acerca de quiénes conformar el grupo familiar, la Sala de Casación Laboral en Sentencia con Radicación 38113 del 27 de octubre de 2010, explicó que “...**El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero acompañamiento emocional y social**, y alcanzar el nivel de un proyecto común de vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar común...”.

Es de anotarse que con la anterior referencia, no se pretende hacer alusión a mantener el denominado *vínculo actuante*, cuando media una separación de hecho entre cónyuges que

mantienen el vínculo matrimonial; sino que la intención es mostrar que, el propósito del Sistema de Seguridad Social Integral y en específico de la pensión de sobrevivientes, es brindar protección a aquellas personas que para la época de la muerte, conformaban el grupo familiar del pensionado o afiliado fallecido o en determinados casos, que lo fueron en tiempo anterior, manteniendo el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal.

Distinta es la situación que se presenta en casos como el presente, donde además de la separación de hecho que se ha mantenido durante muchos años, tampoco se mantuvo un vínculo económico, pues la pareja decidió liquidar también la sociedad conyugal; lo que muestra ausencia de lazos afectivos y económicos y en tales circunstancias, no tiene cabida invocar la calidad de miembro del grupo familiar del causante, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Además, su otorgamiento en este contexto, podría implicar afectación a derechos legalmente constituidos, en favor de quien viene percibiendo ese derecho, por haber acreditado la calidad de miembro del grupo familiar, como compañero (a) permanente, brindando ayuda, apoyo, acompañamiento, para la época de la muerte del causante.

Por lo anteriormente expuesto, **esta Sala de Decisión Laboral**, en forma mayoritaria, encuentra que no le asiste razón al apoderado de la señora Libia del Socorro Serna de Cardona, ya que, **al haberse disuelto y liquidado la sociedad conyugal conformada con el causante, no se cumple con el presupuesto normativo consagrado en la norma citada**, la cual fue declarada exequible por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-515 de 2019.

No desconoce esta Corporación, que la **Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia**, en Sentencias SL5169-2019, SL359-2021, SL1476-2021, SL3251-2021, ha reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes, pese a haberse disuelto y liquidado la sociedad conyugal, señalando que “...*la sociedad conyugal constituye el régimen patrimonial del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin al vínculo matrimonial...*” (SL3251-2021); no obstante, acoge el criterio de la H. Corte Constitucional, porque se ciñe a lo que dice la norma respecto a la exigencia de acreditar **la sociedad conyugal vigente**, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando se reclama en calidad de cónyuge supérstite, existiendo separación de hecho; requisito que no se cumple en el asunto bajo estudio.

Además, en la **Sentencia SU 298 de 2015**, señaló esta Corporación, que **en los eventos en que existen dos precedentes, uno de la jurisdicción especializada y otro de la constitucional**, “...**es el precedente constitucional**, por ser producto de la interpretación autorizada de la Constitución, que es norma de normas, **el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones**. En virtud del principio de supremacía constitucional, los jueces y las autoridades administrativas en su labor de aplicación del ordenamiento jurídico deben dar prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no sólo por la literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la Corte Constitucional...” (Negritas fuera de texto). De igual forma, en la Sentencia **T-109 de 2019**, la Corte precisó que el precedente constitucional tiene “...carácter **vinculante**, no solo en forma vertical (respecto de todos los jueces que conforman la jurisdicción constitucional), sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones que, en aras del principio de supremacía constitucional, deben procurar por una lectura sistemática del derecho, la cual comprende la interpretación auténtica de la Constitución, que se encuentra a cargo de la Corte...”. Por su parte, en

Sentencia **SU354-2017** señaló que “...**los fallos emitidos por la Corte irradian dos tipos de efectos: en el caso de los fallos de control abstracto de constitucionalidad estos hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de ahí que se ha reconocido su carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho;** por el contrario, los efectos de los fallos de tutela en principio son inter partes. No obstante, existe un punto de encuentro y es que ambos fallos se deben observar, no solo por reconocer que la Constitución es norma superior, sino para garantizar el derecho a la igualdad de los administrados...” (Negritas fuera de texto).

Por tanto, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **confirmar** la Sentencia de Primera Instancia, por otras razones, absolviendo a COLPENSIONES de las pretensiones formuladas en su contra por la señora Libia del Socorro Serna de Cardona.

Consulta en favor de la demandante María Carina Celis Cruz, quien pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente:

Al respecto, se afirma en la demanda que la señora María Carina y el señor Luis Eduardo, **convivieron durante 19 años, iniciando la convivencia en el año 1996 y manteniéndola hasta el fallecimiento de aquél, el día 21 de mayo de 2015.**

Encontrándose que los hechos afirmados en la demanda no cuentan con sustento probatorio, ya que, al valorarse las respuestas ampliamente dubitativas, imprecisas e incoherentes, dadas por la misma demandante María Carina en interrogatorio,

no se evidencia ningún rasgo de vida marital con el señor Luis Eduardo y menos durante los 19 años que se aduce; tal como concluyó el Juez de Primera Instancia.

Al indagársele sobre la época en que se inició la supuesta convivencia, manifestó que *fue en un mes de abril, a los 4 meses de habernos conocido nos fuimos a convivir al Municipio de Angelópolis, no tengo la fecha, fue en el año 1977;* esto es, una diferencia de 19 años con respecto a la data afirmada en la demanda, donde se dijo que convivían desde el año **1996**; por lo demás, no se concibe cómo la persona que afirma haber convivido con el causante durante sus últimos 19 años de vida, manifieste que **no recuerda cuánto tiempo duró la convivencia en Angelópolis**, el tiempo que demoró construir la carretera, después se fueron para Venecia y vivieron dos años, luego vinieron para Medellín en Robledo Aures pero **no tiene presente la fecha**; se le pregunta cuánto tiempo vivieron en este barrio y dice que *no tiene la fecha*; respecto a cuánto tiempo convivieron en general, respondió que **hasta el día en que le avisaron que había muerto, hacía 8 días que se había ido a trabajar** y estaba en Cundinamarca, un compañero de trabajo le avisó no recuerda el nombre, **no supo ni dónde lo enterraron**, nadie le informó nada, **no sabe quién lo enterró, ni dónde quedó, ni nada**; se le indagó si había adelantado alguna diligencia para buscarlo, reportar su desaparición, dónde había fallecido, quién lo había reclamado, qué persona se hizo cargo del funeral y expuso que **no sabe dónde falleció**, que nadie le dijo nada, **no sabe quién lo llevó a la clínica**, que él siempre le dijo que no tenía familia, no sabe si tenía hijos y cómo se iba a ir por allá a revolver cosas; actitudes que no denotan el comportamiento de quien se dice era miembro del grupo familiar del fallecido, pues en estos casos, se espera al menos una muestra de preocupación de la compañera permanente y un mínimo esfuerzo para indagar acerca de los hechos que rodearon la muerte

de quien afirma era su compañero de vida; quien murió en Medellín, según el registro civil de defunción, mientras que la demandante dijo que el pensionado se encontraba en Cundinamarca.

Lo afirmado por la demandante ninguna relación tiene con **certificación expedida por Nueva Clínica Sagrado Corazón de Medellín, el día 24 de junio de 2015**, según la cual, **el señor Luis Eduardo ingresó a la unidad de cuidados intensivos de esa institución médica el día 10 de mayo de 2015 y falleció el día 21 del mismo mes y año** (fl 30 archivo 021); también aparece en la historia clínica que el día 20 de mayo de 2015 –un día antes de morir-, la médico tratante anotó “...**Explico ampliamente a esposa, hija y yerno del paciente** la indicación de cirugía y los altísimos riesgos qx; resuelvo múltiples inquietudes. Después de discutirlo entre ellos acceden a que el paciente sea llevado a cirugía ...”; el día 21 de mayo se registró “...lo acompaña su hija, está en inminencia de fallecer ... ya sus familiares conocen su delicada condición; ... paciente que fallece a las 9:10 AM, su hija lo acompaña... ” (fls 59, 61 archivo 021); lo que muestra que el causante estuvo acompañado en su enfermedad por familiares reconocidos por el personal médico; desvirtuándose que estuviera trabajando en Cundinamarca desde ocho (8) días antes de morir, como afirma la señora María Carina, siendo de tal magnitud la incoherencia de sus dichos y el desconocimiento sobre la realidad de lo acontecido, para absolver a la entidad demandada de las pretensiones formuladas en su contra por la señora María Carina.

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral** encuentra procedente, **confirmar la Sentencia de Primera Instancia**, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

COSTAS:

No se condena en Costas en Segunda Instancia, teniendo en cuenta que se adopta la decisión en aplicación de Sentencia de Constitucionalidad proferida por la H. Corte Constitucional, estando en trámite el proceso; existiendo precedente contrario de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL,** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia, que por vía de **Apelación** se revisa y en el grado jurisdiccional de **Consulta** en favor de la demandante María Carina Celis Cruz; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Providencia.

SEGUNDO: **No se condena en Costas en Segunda Instancia,** según lo indicado en la parte motiva.

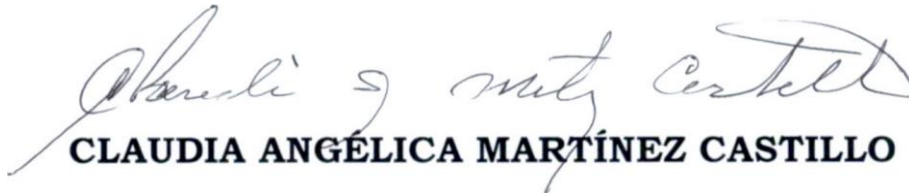
TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Las Magistradas,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

Con salvamento de voto



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso	: Ordinario de Segunda Instancia
Demandante	: MARÍA CARINA CELIS CRUZ
Demandado	: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Interviniente ad Excludendum	: LIBIA DEL SOCORRO SERNA DE CARDONA
Litisconsorte Necesario por pasiva	: MARÍA MIRIAM HERRERA
Radicado	: 05001 31 05 022 2016 00553 01
Providencia	: Sentencia
Temas y Subtemas	: Seguridad Social -Pensión de sobrevivientes causada por muerte de pensionado, reconocida por la entidad de seguridad social en favor de compañera permanente, disputada por compañera permanente y cónyuge con vínculo matrimonial vigente, separación de hecho y liquidación de sociedad conyugal.
Decisión	: Confirma Sentencia absolutoria
Sentencia No	: 132

FECHA SENTENCIA: 28 de junio de 2023

CONSTANCIA DE FIJACIÓN **CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy viernes 30 de junio de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy viernes 30 de junio de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
Secretario



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el respeto que debe imperar en este tipo de asuntos, me aparto de la decisión tomada por la Sala al resolver el recurso de apelación propuesto por **la interviniente ad excludendum señora Libia del Socorro Serna de Cardona**, contra la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, el 2 de agosto de 2021, en el proceso que promovió María Carina Celis Cruz en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** y **al que fue vinculada la recurrente como cónyuge supérstite-**

En efecto, como se dejó plasmado en la providencia de la que me separo, la primera instancia negó el derecho por no acreditarse lazos afectivos, solidaridad y ayuda mutua después de la separación de hecho, conocido como *vínculo actuante*; para la recurrente, con esa decisión el juzgador incurrió en una interpretación errónea del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, literal b aparte final, en cuanto no exige este requisito, como tampoco lo hace la jurisprudencia actual de la Sala de Casación Laboral.

Desde esa perspectiva la Sala consideró que le asistía razón a la recurrente porque no es cierto que, para acceder a una pensión de sobrevivientes, **quien alega la calidad de cónyuge con vínculo matrimonial vigente y sociedad conyugal liquidada**, deba demostrar, además de la convivencia efectiva durante 5 años en cualquier tiempo, que los lazos afectivos permanecieron inalterables hasta el momento de deceso del causante, ya que, como lo invocó la recurrente, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no exige tal requisito (sentencia CSJ SL5169-2019).

A pesar de lo anterior, la Sala encontró que debía confirmar la decisión de primer grado al acoger la interpretación que la Corte Constitucional hizo en la sentencia C-515-2019 del apartado final del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, de ella concluyó que la cónyuge supérstite del causante, no divorciada, no tiene el derecho a percibir una porción de la pensión de sobrevivientes, al haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal.

De esa forma, la exégesis que la Sala mayoritaria adoptó para los eventos en que «no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho», dista de la interpretación que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene sobre este mismo precepto, pues en el entendimiento de esa corte, en tal supuesto la vigencia de la sociedad conyugal no resulta necesaria para que el cónyuge separado de hecho tenga derecho a la pensión de sobrevivientes, sino que para tales efectos basta la existencia de la unión matrimonial, por lo que, transpolando esta regla al asunto bajo examen, la cónyuge separada de hecho, con vínculo matrimonial vigente, y con sociedad conyugal disuelta, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, si acredita una convivencia mínima de 5 años con el causante, en cualquier tiempo.

La aludida concepción responde a la consideración de que las interpretaciones normativas que realicen las instituciones y los jueces, deben atender, primordialmente, dos principios, (i) el de universalidad, de orden constitucional y legal; así, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social es universal en la medida que dispensa una protección, por igual, a todas las personas, y: (ii) pro homine, en cuya virtud el intérprete debe acoger el sentido más extensivo de un texto normativo, cuando se trata de la realización y efectivización de derechos fundamentales.

En efecto, la mencionada norma establece:

ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

[...]

b) [...]

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. **La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;** [...]. (énfasis añadido).

Esta interpretación fue reiterada en la sentencia CSJ SL 1180 -2022 , rad. 87811 MP. Iván Mauricio Lenis, en la que la sustitución de la pensión era disputada por una cónyuge no divorciada, separada de hecho y sociedad conyugal disuelta, con una

compañera permanente que alegaba la convivencia efectiva con el pensionado por más de cinco años anteriores a la muerte de aquel y el derecho exclusivamente en su favor. Este asunto, por contener supuestos fácticos y jurídicos similares al que ocupa la atención de la sala, constituye una regla de decisión que debió ser atendida en esta oportunidad.

Una mirada a las decisiones que allí se estudiaron dan cuenta de que, la primera instancia distribuyó la pensión entre ambas beneficiarias, y la segunda instancia, con sustento en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en la jurisprudencia de la corte y en las pruebas que analizó, expresó *«las obligaciones personales derivadas del matrimonio se mantienen en vigencia del contrato matrimonial, dado que es el que confiere derechos y asigna obligaciones a los consortes y, en consecuencia, permite incluirlos como miembros de su grupo familiar»*, una vez señaló esto, dispuso que ambas reclamantes acreditaron los requisitos legales para ser beneficiarias de la prestación deprecada, porque *«después de la separación de cuerpos, entre los esposos se mantuvo el apoyo como pareja»*.

Al resolver el recurso de casación interpuesto por la compañera permanente, quien con fundamento en la interpretación hecha por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-515-2019, acusó a la sentencia del tribunal de haber interpretado erróneamente el inciso 3º del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por cuanto la cónyuge perdió el beneficio por cuenta de la inexistencia de la sociedad conyugal, la Corte se planteó que debía *«determinar si el ad quem erró al otorgarle en forma proporcional la pensión de sobrevivientes a la demandante en su condición de cónyuge supérstite, pese a que la sociedad conyugal con el causante fue disuelta y liquidada»* y al momento de solucionar ese problema jurídico expuso:

Pues bien, la Corte en diferentes oportunidades ha señalado que si bien la sociedad conyugal constituye el régimen patrimonial del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin al vínculo matrimonial, como equivocadamente lo entiende la recurrente, pues aquel continúa vigente hasta tanto se declare su nulidad o se presente una de las causas de disolución previstas en el artículo 152 del Código Civil, norma que establece que el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado, mientras que el religioso por el decreto de la cesación de sus efectos civiles y, además, por los cánones y normas correspondientes al ordenamiento religioso (CSJ SL3251-2021).

Bajo este contexto, es evidente que la disposición con la que se resuelve el presente caso es la contenida en el inciso 3º del literal b) de la Ley 797 de 2003, como acertadamente lo hizo el Tribunal, **y de cuya interpretación no se advierte ningún yerro, en tanto se acompasa con el criterio fijado por esta Corporación en el sentido de que la cónyuge separada de hecho pero con vínculo matrimonial vigente, aun hallándose disuelta la sociedad conyugal, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes si acredita una convivencia**

mínima de 5 años con el causante en cualquier tiempo, en vigencia del vínculo matrimonial.

Precisamente esa es la intelección que la Sala le ha dado a dicha preceptiva, entre otras, en las sentencias CSJ SL3251-2021, CSJ SL1869-2020, CSJ SL2232-2019, CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1399-2018,

En la providencia aludida, la corporación reiteró las razones que ofreció en la CSJ SL1399-2018 para sostener que el cónyuge separado de hecho tiene derecho a percibir la pensión si el vínculo matrimonial está vigente, de modo que, *« otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho »*.

Por el contrario, en el caso que es objeto de nuestra atención, la Sala por mayoría, a pesar de evidenciar la existencia de un precedente uniforme en la Sala de Casación Laboral **negó el otorgamiento de la prestación por el solo hecho de que la sociedad conyugal está disuelta, aunque existía el verdadero vínculo jurídico**; pues bien, *en mi concepto*, la interpretación que la Corte Suprema viene haciendo está acorde con los artículos 42 y 48 de la Carta Política, de acuerdo con los cuales la pensión de sobrevivientes es una prestación derivada de la seguridad social, por lo tanto, respeta la voluntad del legislador de proteger la *“unión conyugal”*, lo cual se traduce en la necesidad de conceder la prestación al(la) cónyuge beneficiario (a) siempre que subsista del vínculo matrimonial y demuestre la convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años en cualquier tiempo.

En cuanto al mismo asunto, en las sentencias CSJ SL1399-2018, reiterada en las CSJ SL5141-2019 y CSJ SL1869-2020, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema insistió en la interpretación que hizo en la **SL, 13 mar. 2012, rad. 45038** sobre el conflicto o contradicción que se presenta entre los conceptos de *«unión conyugal»* a que se refiere el inciso 2º del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 con el de *«sociedad anterior conyugal»*, del inciso 3º *ibid.*:

En efecto, la antinomia contenida en el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, visible cuando en su inciso 2.º hace referencia a *«sociedad anterior conyugal»* y, en el tercero, a *«unión conyugal»*, fue resuelta por la Corte a favor de la última a través de sentencia SL, 13 mar. 2012, rad. 45038, en los siguientes términos:

El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 contiene dos situaciones que no pueden equipararse, una relacionada con la existencia de la *“unión conyugal”* y la restante con la de la *“sociedad conyugal vigente”*. Estima la Sala, que si la protección que otorgó el legislador fue respecto del vínculo matrimonial, tal como se destacó en sede de casación, debe otorgarse la pensión a quien acreditó que el citado lazo jurídico no se extinguió amén de que no hubo divorcio, pues por el especial régimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos de orden personal, relativos a las obligaciones de los cónyuges entre sí y con sus hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la comunidad de bienes que se conforma con ocasión de aquel.

Esa distinción, en eventos como el aquí se discute es de especial interés, pues frente a los primeros, inclusive, subsiste la obligación de socorro y ayuda mutua, que están plasmados en el artículo 176 del Código Civil que dispone que “los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”, y en el propio artículo 152, modificado por el artículo 5 de la Ley 25 de 1992, prevé que el matrimonio se disuelve, entre otros, por el divorcio judicialmente decretado.

Así, por ejemplo, en sentencia C-533 de 2000, la Corte Constitucional abordó la naturaleza del matrimonio, y en torno al punto que aquí interesa estimó:

“(…) el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas (...) En el matrimonio (...) las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”.

Por demás, es el propio artículo 42 de la Constitución Política el que señala que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”, y si a ello se suma la voluntad del legislador de proteger la “unión conyugal” a la que hizo referencia la norma que aquí se discute, no sería propio negar el otorgamiento de la prestación cuando la sociedad conyugal esté disuelta, pero exista el verdadero vínculo jurídico, máxime cuando en este evento, el propio Ramón Antonio Castrillón Uribe, en desarrollo de sus obligaciones de socorro y ayuda mutua, previó el tema pensional e incorporó en la cláusula atrás transcrita su deseo de prodigar amparo, a quien convivió con él por más de 20 años.

La anterior interpretación la ratifica la Corte en esta oportunidad, habida cuenta que, a diferencia del contrato matrimonial, el cual incorpora derechos y obligaciones personales tales como los de socorro y ayuda mutua, tolerancia y respeto a la personalidad del cónyuge, los cuales subsisten mientras el vínculo no sea disuelto por muerte, divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la sociedad conyugal hace referencia al régimen económico de la unión. Por lo tanto, el primero de los conceptos posee un significado subjetivo e intrínseco, del cual emanan unos deberes personales, mientras que el segundo alude a una sociedad patrimonial o de bienes.

Al compás de lo anterior, no es adecuado atar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, figuras que responden a contenidos netamente económicos, sino más bien a la vigencia del contrato matrimonial, dado que es esta unión la que confiere derechos y asigna obligaciones personales y subjetivos a los consortes, y, por consiguiente, permite incluirlos como miembros de su grupo familiar.

Pero tampoco resulta acertado enervar el derecho pensional ante figuras tales como la separación de hecho o de cuerpos, toda vez que en la primera de estas situaciones la obligación de convivir subsiste y en la segunda tan solo se excluye la de cohabitación, pero no la de socorro y ayuda mutua que, pese a esas circunstancias, subsiste.

Para decirlo de otro modo, la separación de cuerpos, figura jurídica en virtud de la cual solo se extingue el deber de cohabitación, no es un obstáculo para que el consorte que haya convivido durante 5 años con el causante acceda a la prestación. Así mismo, la separación de hecho tampoco frustra este derecho, pues esta circunstancia fáctica no extingue de suyo los deberes recíprocos de los cónyuges de entrega mutua, apoyo incondicional y solidaridad, los cuales perviven hasta tanto se disuelva el vínculo matrimonial.

Ello explica por qué, para el legislador del 2003 a pesar de la separación de hecho de los cónyuges, es decir, de la cesación de la comunidad de vida, si alcanzan a convivir al menos 5 años, el supérstite puede adquirir la pensión de sobrevivientes mientras ese vínculo no se disuelva, ya que los deberes de la pareja subsisten, al margen de si se allanaron a ellos o no.

Así las cosas, en resumen, el cónyuge con unión marital vigente, separado o no de hecho, que haya convivido en cualquier tiempo durante un lapso no inferior a 5 años con el afiliado o pensionado fallecido, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes.

Las anteriores reglas han sido empleadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de la especialidad laboral, para fallar los casos en los que se plantean supuestos de hecho y de derecho similares a

los propuestos en esta oportunidad, aún en vigencia de la sentencia CC C-515 de 2019 y, por lo tanto, corresponde al precedente vertical vinculante para proferir decisiones futuras en casos semejantes, pues es justamente a los jueces ordinarios a quien corresponde determinar el sentido de las disposiciones legales, de ahí que la constitución y la ley conceda a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la función de unificación de la jurisprudencia, tarea implícita en las atribuciones concedidas como tribunal de casación.

Decimos esto porque el carácter vinculante de estas reglas o subreglas de derecho, encuentra su fundamento en la salvaguardia de los principios de igualdad material y seguridad jurídica, y en que los ciudadanos tienen derecho a que las causas que someten a la decisión judicial se resuelvan con base en la interpretación uniforme del órgano de cierre.

No se pierda de vista que en la sentencia SU 354-2017 la Corte Constitucional insistió en que el precedente judicial no está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que se extiende a la de «*las Altas Cortes*». En la sentencia C-335 de 2008, se refirió a las decisiones de todos los órganos de cierre jurisdiccional y reiteró el carácter vinculante de su jurisprudencia, en los siguientes términos:

Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redundará en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. **Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares”.**

De manera similar se pronunció la guardiana de la constitución en la sentencia C-816 de 2011, al sostener que la fuerza vinculante del precedente de las Altas Cortes surge de su definición constitucional como órganos de cierre, “*condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones*”.

También es cierto, como se indica en la providencia mayoritaria, que la Corte Constitucional en la sentencia SU298 de 2015 señaló que es el precedente constitucional el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones, pero en ese punto no es posible dejar de lado la regla de igualdad prevista en el artículo 13 de la carta política, que de acuerdo con el artículo 85 ibidem es de aplicación inmediata, de tal manera que toda situación en la que se evidencie un trato diferenciado en

decisiones judiciales, transgrede aquel principio; se dice lo anterior porque las situaciones fácticas que rodearon el presente asunto acontecieron antes de proferirse la sentencia C-515 de 2019 aspecto temporal que no se tuvo en cuenta en el cambio de interpretación propugnado en la decisión de la cual me distancio.

En efecto en la sentencia SU460 de 2016, la Corte Constitucional analizó el problema de los efectos en el tiempo de los cambios de postura jurisprudencial y aseguró que es necesario restringirlos solo a las decisiones futuras para no vulnerar el debido proceso, así juzgó necesario verificar si la aplicación inmediata de la nueva interpretación puede generar una afectación ostensible a quienes acudieron a la administración de justicia con fundamento en las reglas establecidas en la jurisprudencia vigente y que posteriormente fueron modificadas, como sucede en el caso que se analizó por la Sala:

(...) la aplicación de la jurisprudencia que define sobre las reglas del proceso judicial está supeditada a un examen fáctico que permita determinar si su inmediata aplicación significa una afectación ostensible y transcendental de un derecho fundamental de los sujetos procesales, quienes en virtud de la confianza legítima, accedieron a la administración de justicia con fundamento en las reglas establecidas por la jurisprudencia vigente, y estas reglas, posteriormente, fueron modificadas por un precedente que resulta determinante para producir una afectación iusfundamental. Con base en todo lo expuesto, esta Corte concluye que, si bien la regla general indica que la jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en este sentido vincula a los operadores judiciales que deben tenerla en cuenta en sus decisiones, la autoridad judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo estar determinada por la jurisprudencia vigente para entonces, por lo que el fallador, al momento de proferir su decisión, debe establecer, a partir de un análisis fáctico, si el cambio de jurisprudencia resultó definitivo en una posible afectación de derechos fundamentales al modificar las reglas procesales con base en las cuales, legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de conocimiento puede, como excepción a la regla general de aplicación de la jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la conducta procesal de las partes.

Precisamente la sentencia de la que me separo se abstuvo de considerar los efectos que posiblemente pudiera ocasionar la aplicación inmediata de la interpretación contenida en la sentencia CC C-515 de 2019, atendiendo a que lo debatido es el derecho fundamental a la pensión de sobrevivientes.

Por último, como lo enfatizó el voto disidente de la magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER a la sentencia C-515 de 2019, «**2. Los cónyuges separados de hecho con y sin sociedad conyugal vigente se encuentran en la misma circunstancia desde la perspectiva del matrimonio y la seguridad social**», toda vez que la separación de hecho no extingue los derechos y obligaciones personales del matrimonio continúan vigentes sin importar si los cónyuges separados de hecho mantienen o no vigente la sociedad

conyugal, y ello encuentra su razón de ser en que como allí se dijo «el Sistema de Seguridad Social en Pensiones y el régimen patrimonial del matrimonio obedecen a lógicas diferentes. (...) Por ello, al tratarse de figuras disímiles, no es congruente con la protección del derecho fundamental a la seguridad social exigir al cónyuge sobreviviente la vigencia de los efectos patrimoniales del matrimonio para acceder al amparo de las prestaciones pensionales», mucho menos si se entiende que «los derechos pensionales se van construyendo con los aportes a la seguridad social que hacen las personas a lo largo de su vida».

Fecha ut supra,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO